

**Chillán, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.**

**VISTO:**

En estos antecedentes R.I.T. 242-2023, R.U.C. 231001970-9, por sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, se condenó a Joaquín Alberto Rivera Cid a sufrir la pena de siete años y ciento ochenta y cuatro días de presidio mayor en su grado mínimo y a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de robo en lugar habitado o destinado a la habitación, cometido el 15 de abril de 2023, en la comuna de Bulnes, sin costas, debiendo cumplirla efectivamente.

Contra dicho fallo la Defensora Penal doña Pía Espinoza Garcés, en representación del condenado, recurrió de nulidad en contra de la sentencia, invocando como causal principal la prevista en la letra a) de art 373 del Código Procesal Penal, luego, como causal subsidiaria, causal o motivo absoluto de nulidad, la prevista en la letra e) del artículo 374 del mismo cuerpo normativo, y por último, como segunda causal subsidiaria la del artículo 373 letra b) del cuerpo legal ya citado.

La Excma. Corte Suprema señaló que de la atenta lectura del libelo, lo que se reprocha por la letra a) del artículo 373, en realidad se trataría de un cuestionamiento al ejercicio de las facultades que la ley le otorga al defensor, lo que es materia de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva de conformidad al artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, por lo cual, se procederá en la forma que autoriza el artículo 383 de ese cuerpo legal.

Concedido el recurso por el tribunal a quo, se elevaron copias del registro de audio y la carpeta que consigna la sentencia del juicio de que se trata.

La Corte lo declaró admisible, procediendo a conocerlo en la audiencia del día doce de febrero del presente año, llevándose a efecto la vista del recurso interviniendo el abogado de la defensa don Nicolás Castillo Cruz y por el Ministerio Público don Rodrigo Flores Luna, fijándose para la lectura del fallo el día de hoy, a las 10:00 horas.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**Primero:** Que, la defensa del encartado interpone recurso de nulidad en contra del fallo referido señalando que el día 30 de noviembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, la audiencia de juicio oral para conocer la acusación del Ministerio Público en contra de su representado.



Añade que, la acusación del Ministerio Público en contra se fundó en los siguientes hechos: “El día 15 de abril del año 2023, en horas de la mañana, el acusado Joaquín Rivera Cid a eso de las 06:10 aproximadamente llegó hasta el domicilio ubicado en Calle Central N° 365, Villa Fresia de la comuna de Bulnes, habitado por doña Marilin Candía Ramírez y su grupo familiar, entre ellos su hijo Daniel Urrutia. Una vez en el lugar saltó el cerco perimetral frontal de la casa habitación y llegó hasta el antejardín. Una vez allí, sustrajo con ánimo de lucro y sin voluntad de su dueño una bicicleta marca Oxford, aro 26, color verde. Para luego huir de la propiedad de la misma manera que ingresó, esto es, volviendo a saltar el cerco perimetral dándose a la fuga con la especie en su poder.”

Posteriormente, pasa a referirse a las causales en las que se funda su recurso, señalando al respecto como causal principal: la prevista en la letra a) de artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es: “cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.” Señala como causal subsidiaria: causal o motivo absoluto de nulidad: la prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal: “cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”. Y por último, señala como segunda causal subsidiaria: artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Lo anterior debido a que considera que se ha aplicado a su defendido una circunstancia agravante que no era procedente, lo que ha incidido en el quantum de la pena aplicada y que ha limitado al Tribunal Oral al momento de determinarla.

Agrega que, respecto de la causal principal, se ha incurrido en dos infracciones a saber: 1.- La primera, consistente en haber valorado de manera positiva la declaración del testigo de iniciales D.U.C., pese a no haber prestado declaración anteriormente durante la investigación, vulnerando de esta manera el debido proceso, ya que esta declaración debió haber sido valorada negativamente por el Tribunal. 2.- La segunda, consistente en la forma en que el testigo menor de edad, de iniciales D.U.C. declaró en el juicio, no ajustándose a derecho tal forma de prestar declaración, infringiendo de esta manera el debido proceso como derecho fundamental de su representado. Respecto de este punto, con fecha 29 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicita al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que deje sin efecto la solicitud realizada con fecha 28 de noviembre, la cual consistía que el testigo adolescente de iniciales D.U.C. declarará a través de



biombo, solicitando en su lugar que declarará en sala especial en virtud de lo consagrado en el artículo 26 de la ley 21.057. El Tribunal accede a la solicitud del Persecutor. Ante tal resolución la Defensa presenta por escrito recurso de reposición. Con fecha 30 de noviembre de 2023, previo al inicio de la audiencia de juicio oral, se pasó a resolver de manera verbal el recurso de reposición presentado por la Defensa. La defensa manifestó su oposición, señalando que la misma no resulta aplicable al caso en concreto, toda vez que el delito objeto de juicio es un robo en lugar habitado y tal solicitud no se encuadra dentro de las hipótesis de ilícitos que establece la ley 21.057 en su artículo 1°, y siendo el derecho penal de interpretación estricta, no cabe sino rechazarlo, toda vez que la deposición en sala especial es una norma excepcionalísima que solo procede al cumplirse con los presupuestos que establece el legislador, lo cual no se da en este caso.

Señala que, respecto de la primera causal subsidiaria, esta se manifiesta en el siguiente aspecto del fallo recurrido: La imposibilidad de reproducir el razonamiento utilizado por el tribunal para alcanzar las conclusiones fácticas a que arriba la sentencia, con lo que no se cumple con lo indicado en el artículo 297 incisos primero y final, disposición a la cual hay que remitirse en virtud del artículo 342 letra c), ambos del Código Procesal Penal.

Posteriormente pasa a referirse al principio de razón suficiente y el modo en que este se infringe, manifestando que, en el caso de marras, la relevancia en la valoración de los medios de prueba radica en las declaraciones vertidas en estrados tanto por la víctima, como la de los testigos funcionarios de Carabineros, además de la insuficiencia de otros medios de prueba para acreditar la vía de ingreso al domicilio. Así las cosas, considera que la decisión impugnada debe ser dejada sin efecto, pues otra solución produciría el inmenso agravio a su representado de soportar una pena gravosa, sin que la sentencia que la impone cumpla con los requisitos de validez que el legislador ha establecido en el artículo 342 letra c), con relación al artículo 297.

Expresa que, respecto de la segunda causal subsidiaria, considera que la sentencia recurrida incurre en la siguiente razón jurídica de pertinencia de nulidad: Artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Lo anterior debido a que se ha aplicado a su defendido una circunstancia agravante que no era procedente, lo que ha incidido en el quantum de la pena aplicada y que ha limitado a al Tribunal Oral al momento de determinarla, tal como ya se señaló en su oportunidad.



Termina solicitando que en mérito de lo expuesto, se tenga por interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 5 de diciembre de 2023, a fin que conociendo del mismo, en el caso de acoger la causal principal: invalide el juicio oral efectuado, y la sentencia en él recaída, anulando ambos, y se determine el estado en que hubiere de quedar el procedimiento ordenando la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que este disponga la realización de un nuevo Juicio Oral. En cuanto a la primera causal subsidiaria: se declare la nulidad del Juicio Oral y de la sentencia en aquella parte que condenó a su defendido como autor de robo en lugar habitado, ordenándose la realización de un nuevo juicio oral ante el Tribunal no Inhabilitado que corresponda. y por último, en cuanto a la segunda causal subsidiaria: se declare la nulidad de la sentencia recurrida sólo en aquella parte que condenó a su defendido como autor de robo en lugar habitado, declarando expresamente que no se configura la agravante de reincidencia específica del 12 N°16 del Código Penal, y de esta forma lo acoja, anule la sentencia y dicte, sin nueva audiencia pero separadamente, sentencia de reemplazo que en definitiva condene a su representado a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en grado mínimo.

**Segundo:** Que, comenzando el análisis de las diversas causales de nulidad planteadas en estos autos, tal proceso se realizará analizando en cada caso las causales invocadas en el mismo orden que han sido planteadas. En consecuencia, se examinará primeramente la principal, consistente en la prevista en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, respecto de la cual la Excm. Corte Suprema señaló que, de conformidad con lo que se reprocha por esta causal, y tal como ya se hizo referencia, en realidad se trataría de un cuestionamiento al ejercicio de las facultades que la ley le otorga al defensor, lo que es materia de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva de conformidad al artículo 374 letra c) del Código Procesal Penal, el cual seña literal “cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga”. Enseguida, se procederá al examen de la primera causal subsidiaria, consistente en la consignada en la letra e) del artículo 374 del mismo código, esto es, “Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”. Finalmente, la segunda causal subsidiaria corresponde a la contemplada en la letra b) del artículo 373 de Código Procesal Penal, esto es, “Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.”



**Tercero:** Que, la primera causal se fundamenta en el caso concreto, en dos argumentos, consistentes respectivamente en que el menor de nombre Danilo, hijo de la denunciante, no declaró durante la investigación, por lo que la defensa se vio impedida de ejercer los derechos que le competen, y por otra parte, en que dicho testigo declaró en sala especial, cuestión que a juicio de la recurrente no correspondía.

**Cuarto:** Que, el primer fundamento fue planteado por la defensa durante el desarrollo del juicio oral, y previo debate entre los intervinientes, fue rechazado por el tribunal, por lo que no es efectivo que la defensa no hubiere podido ejercer sus derechos, como esta lo pretende, toda vez que, lo cierto es que fue la misma defensa la que omitió ejercer la facultad de contrainterrogar al menor. Y entonces, de los antecedentes no aparece que, tal y como se dijo por los sentenciadores, la defensa hubiere sufrido perjuicio que amerite la declaración de nulidad de la sentencia.

**Quinto:** Que, en cuanto al segundo argumento de esta primera causal, el cual fue también materia de un incidente durante el juicio, el que fue rechazado, cabe señalar que el criterio central para permitir la declaración de un menor en el juicio y resguardar sus derechos y garantías, autoriza al tribunal para tomar dicha declaración en sala especial, y es eso lo que precisamente ocurrió en el caso de autos, en el que los sentenciadores ejerciendo facultades que les competen, ordenaron que el adolescente Danilo declarara en sala especial.

**Sexto:** Que, en consecuencia, y teniendo presente que ambos fundamentos de la causal fueron debatidos ante el a quo, esta Corte, compartiendo la decisión adoptada en cada caso, y no existiendo perjuicio para la defensa del imputado reparable únicamente con la declaración de nulidad, es de criterio de desechar esta primera causal.

**Séptimo:** Que, habiéndose desechado la causal principal, corresponde ahora analizar y resolver lo concerniente a la primera subsidiaria, correspondiente a la establecida por el legislador en el artículo 374 letra e) , en relación con el artículo 342 letras c), d) y e), ambos del Código Procesal Penal; causal de invalidación que la recurrente funda en una supuesta infracción al principio de identidad, que forma parte de la lógica formal, cuya observancia constituye limitación al régimen de apreciación libre de la prueba rendida, en términos que esta no puede transgredir la lógica, las reglas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

**Octavo:** Que, del análisis concreto del fallo recurrido, es posible extraer que los sentenciadores no infringieron de manera alguna el principio de razón suficiente, no obstante que el legislador procesal penal es particularmente



exigente en cuanto a que la fundamentación de la sentencia debe ser producto de un proceso racional, acucioso y pormenorizado de los medios de prueba aportados por los intervinientes, ya sea para obtener una decisión de condena en el caso del Ministerio Público, ya sea para lograr una sentencia absolutoria tratándose de la Defensa de el o los encartados.

**Noveno:** Que, siguiendo en el mismo orden de ideas, conviene dejar asentado que los señores jueces en la tarea de valorar la prueba rendida conforme a la ley, en el motivo undécimo del fallo recurrido, dieron cumplimiento estricto a la exigencia legal, y en este sentido, conviene precisar además, que no es posible que por la vía de la causal invocada, la Corte pueda de manera alguna entrar a alterar o modificar los hechos que el tribunal tuvo por acreditados en forma soberana, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Entonces, como consecuencia de lo que se ha venido diciendo, corresponde también el rechazo de la presente causal, y proceder por tanto, enseguida, al análisis de la segunda subsidiaria.

**Décimo:** Que, entrando en dicho análisis, la causal antedicha se funda por el recurrente en que el fallo impugnado habría incurrido en error de derecho con influencia sustancial en su parte dispositiva, pues determinó que afectaba al encartado una agravante que no correspondía acoger en su contra, consistente en la establecida en el artículo 12 N°16 del Código Penal, esto es, *“Haber sido condenado el culpable anteriormente por delito de la misma especie”*, cuestión ésta que fue también alegada durante el desarrollo del juicio oral.

Que el fundamento que tuvieron los sentenciadores para arribar a la conclusión antedicha, consistió en que el encartado Joaquín Rivera Cid, había sido condenado con anterioridad por el delito de robo con violencia. En este sentido, el tribunal argumentó que tratándose el presente ilícito de un robo cometido en las dependencias de un inmueble, por lo que se afecta el derecho de propiedad de la víctima, en tanto que en el anterior, afecta el mismo derecho de la víctima, en uno y otro caso la modalidad de comisión es similar; En el robo con violencia, venciendo la fuerza física o resistencia de la víctima y en el robo con fuerza, empleando la fuerza física para lograr la sustracción de la cosa o cosas objetos del delito. Ahora, al igual que lo razonado por el Tribunal Oral en lo Penal, esta Corte comparte que la exigencia del legislador en cuanto a que la reincidencia específica no consiste en que el delito actual y el anterior sean idénticos, sino solo que afecten el mismo bien jurídico y tengan una modalidad similar de comisión .



**Undécimo:** Que, en la especie, la Corte estima concurrente la agravante atribuida al imputado, por cuanto entre el presente delito de robo con fuerza y el anterior de robo con violencia, se afectó el mismo bien jurídico protegido por el legislador y la modalidad de comisión de uno y otro, si no idéntica, es similar.

**Duodécimo:** Que, conforme a todo lo razonado previamente, habiéndose desechado la primera causal principal, se desechará también la primera y segunda subsidiarias, por lo cual solo cabe desechar el recurso de nulidad intentado por todas las causales.

**Decimotercero:** Que, entonces, conforme lo anteriormente expuesto, solo cabe desechar el recurso de nulidad interpuesto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 373 letra b), 374 letras c) y e), 383 y 384 del Código Procesal Penal, artículos 432 y 440 N° 1 del Código Penal, **se rechaza**, por todas la causales, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por la Defensora Penal Público, doña Pía Espinoza Garcés, en representación de Joaquín Alberto Rivera Cid, en contra de la sentencia de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, en la causa 242 -2023, R.U.C. 231001970-9, declarándose que ella no es nula.

Regístrese y dese a conocer a los intervinientes que asistan a la audiencia fijada al efecto, sin perjuicio de su notificación por el estado diario e insértese en el acta respectiva.

Hecho, devuélvanse.

Redacción del Fiscal Judicial señor Vigueras.

**R.I.C. 14-2024-REFORMA PROCESAL PENAL.**





Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKBXXMSPQTB



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C., Paulina Gallardo G. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Vigueras S. Chillan, veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: PKBXXMSPQTB